



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

**Expte. N° 8.508/2025/RH1 “Banco Santander Argentina S.A. c/ Comisión Nacional de Valores s/ apelación de resolución de la Comisión Nacional de Valores”**

En Buenos Aires, a los        días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“Banco Santander Argentina S.A. c/ Comisión Nacional de Valores s/ apelación de resolución de la Comisión Nacional de Valores”** y de acuerdo con el orden de sorteo, **la doctora Florencia Nallar** dijo:

I. Mediante la Resolución N° RRFCO-2025-294-APN-DIR#CNV del 6 de marzo de 2025, la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) desestimó el planteo de nulidad articulado por el Banco Santander Argentina S.A (“Santander”) y sus Directores y los absolvió junto a los Síndicos Titulares, de la posible infracción al art. 35, incisos a) y c) y 112 de la Sección IX, del Capítulo II, del Título VII y artículo 4, inciso b) de la Sección II, del Capítulo II, del Título XII de la ley 26.381, a los arts. 59 y 294 inciso 9) de la ley N° 19.550, 35 incisos a) y c) y 42 y 43, inciso b) de la Sección XI del Capítulo II del Título VII y 4° inciso b) de la Sección II del Capítulo II del Título XII de las NORMAS (N.T 2013 y mod.)

Finalmente, y en lo que aquí interesa, aplicó la sanción de multa de \$5.000.000 a Santander, en su condición de Agente de Liquidación y Compensación, por la infracción acreditada a los artículos 112 de la Ley N° 26.831; artículos 35, incisos a) y c) y 42 y 43, inc. b) de la Sección XI del Capítulo II, del Título VII y 4°, inciso b), de la Sección II, del Capítulo II, del Título XII.

Contra tal decisión, la entidad bancaria interpuso el recurso directo previsto en el art. 143 de la ley 26.831 el 27/03/25, el cual fue concedido el 25/04/25 y contestado por la CNV el 7/08/25.



Esta Cámara es competente para entender en el recurso interpuesto en virtud de lo dispuesto en el art. 143 de la ley 26.831, según el texto prescripto en el art. 95 de la ley 27.440 (B.O. 11/05/2018). El art. 97 de ese cuerpo normativo modifica el art. 145 de la ley 26.831 y dispone –contra toda técnica procesal- que el recurso tramitará de acuerdo con las normas de las apelaciones libremente concedidas.

**II.** A fin de tratar adecuadamente las quejas del impugnante, conviene en primer término esclarecer sucintamente los antecedentes fácticos del caso.

Los días 11/04/14, 25/08/14, 14/12/15, 14/12/15, 21/03/16 y 10/07/17, la CNV formó los expedientes administrativos n°1.620/14, 2.816/14, 3.786/15, 2.338/16, 3739/15, 769/16, y 2.452/17, respectivamente.

En dichos procesos de verificación se observaron infracciones que fueron denunciadas por diversos comitentes, en momentos y por cuestiones distintas, pero todas vinculadas a la recurrente en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación,

**III.** En atención a los hechos reseñados, me abocaré a examinar el primer agravio de los recurrentes, quienes impugnan la resolución por violación de la garantía de plazo razonable (ver recurso, punto V.1). La suerte de dicho planteo condiciona la de las demás quejas esgrimidas respecto de la valoración hecha en la resolución recurrida de la conducta desplegada por los sumariados.

Antes que nada, pongo de relieve que a los fines de definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ello, ciertamente, con el límite de no alterar los extremos de hecho-, sino que analizaré los planteos que conceptúo necesarios para la debida resolución del litigio. Ello así, pues –como es sabido- los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos expuestos





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

por las partes en sus agravios, sino sólo aquellos que estimen conducentes para la correcta solución del litigio (conf. CSJN, Fallos: 310:267; 324:3421, entre muchos otros). Dichas precisiones son necesarias atendiendo al enfoque sostenido por cada una de las partes, como así también a las conclusiones que ellas extraen de los distintos temas que conforman este pleito.

Aclarado lo anterior, conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió el 26/06/12 *in re* “Losicer, Jorge Alberto otros c/ BCRA - Resol. 169/05” en una cuestión análoga a la que se plantea en el *sub lite*, encontrándose en juego la garantía de la defensa en juicio y el derecho obtener una decisión en el “plazo razonable” al que alude el art. 8º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es que el principio cuya denunciada violación se analiza en el *sub lite* no sólo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional –derivado del *speedy trial* de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-), sino que, además, se encuentra previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (art. 8.1 de la CADH y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) (cfr. CSJN, “Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, del 9/04/19; en el mismo sentido, fallo “Losicer” referenciado). La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado de obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal (Fallos: 272:188; 300:1102; 332:1492; 336:2184).

En el mismo orden de ideas, se sostuvo que las garantías que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción de su



inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5º, 18 y 33 de la Constitución Nacional), se integran por una rápida y eficaz decisión judicial (Fallos: 300:1102). Resulta relevante destacar que la doctrina del fallo del Supremo Tribunal descarta que el carácter administrativo del procedimiento sumarial constituya un obstáculo a la aplicación de los reseñados principios, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías constitucionales y convencionales enunciadas no se encuentra limitada al Poder Judicial, sino que aquéllas deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública a la que se hubieran asignado funciones jurisdiccionales, puesto que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana” (CIDH, caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71). En igual sentido, la Corte sostuvo que el “plazo razonable” de duración del proceso al que alude el art. 8º, inc. 1º, de la Convención Americana constituye una garantía exigible en toda clase de proceso (Fallos: 336:2184, considerando 9º).

Retomando la doctrina emanada de “Losicer”, se estableció allí que el carácter disciplinario y no penal de las sanciones tampoco resulta óbice a la aplicación de las mencionadas garantías. Ello, con sustento en el precedente “Baena” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se dispuso –con apoyo en precedentes de la Corte Europea- que la justicia realizada a través del debido proceso legal “se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarios y no penales”, pues admitir esa interpretación “equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso” (CIDH, “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

febrero de 2001, párrafo 129, citado en el considerando 9° de “Losicer”).

Así establecida la aplicación de la garantía del “plazo razonable” de duración que emana del art. 8, inc. 1°, de la CADH a toda clase de procesos, queda a los jueces la determinación casuística de si se ha configurado una demora excesiva y/o injustificada en la decisión.

Ahora bien, ante la ausencia de pautas temporales que indiquen cuál sería esa “duración razonable”, la Corte –con fundamento en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, extrajo los siguientes parámetros para su determinación: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento. Consideró que resultaba apropiada la aplicación de dichas pautas para apreciar la razonabilidad en la duración de un procedimiento, dada la indeterminación de la fórmula empleada en la respectiva norma, pues la garantía a obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no puede traducirse en un número fijo de días, meses o años (CSJN, Fallos: 330:3640).

**IV.** Así establecida la doctrina del plazo razonable y los parámetros para su determinación, adelanto mi posición en cuanto a que el trámite sumarial consumió un lapso irrazonable.

Así lo considero, pues se verifican en autos prolongados lapsos de inactividad procesal que se presentan como el principal motivo de la dilación del sumario y son enteramente atribuibles a la Comisión Nacional de Valores. Veamos.

La instrucción del sumario se dispuso el 12/07/18 (conf. Resolución N° RRFCO-2018-49-APN-DIR#CNV; conf. fs. 99/107 de la parte 2 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 98/313 del expediente digital). El 20/07/18 los sumariados solicitaron una prórroga de 15 días para efectuar su presentación de descargo, la cual



fue concedida el 23/07/18, y aquéllos presentaron sus memoriales el 15/08/18 (conf. fs. 217/254, 297/302, 316/320, 351/355 y 373/377 de la parte 6 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 1094/1501 del expediente digital; fs. 425/431, 451/457 de la parte 7 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 1502/1901 del expediente digital).

El período de prueba se extendió desde su apertura el 30/01/23 (conf. fs. 617/622 de la parte 8 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 1902/2305 del expediente digital) hasta su clausura del 5/06/23 (conf. fs. 955/958 de la parte 9 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 2306/2687 del expediente digital).

Cabe destacar aquí que las actuaciones administrativas acompañadas al expediente digital dan cuenta de que desde los descargos presentados en el mes de agosto de 2018 hasta la apertura del período de prueba en el mes de enero de 2023 hubo prácticamente una inactividad de parte de la CNV en la tramitación de las actuaciones (conf. parte 7 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 1502/1901 del expediente digital); de hecho, sólo se observan actuaciones aisladas durante los años 2021 y 2022.

Los memoriales fueron presentados en el mes de junio de 2023, apenas clausurado el período de prueba (conf. fs. 962/995 de la parte 9 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 2306/2387 del expediente digital), no obstante lo cual la elevación del proyecto de resolución final se efectuó casi un año después, en mayo de 2024 (conf. fs. 1004/1025 de la parte 10 de las actuaciones administrativas acompañadas a fs. 2688/2811 del expediente digital).

Por último, la Resolución que puso fin a la cuestión, que es la aquí cuestionada, data del 6 de marzo de 2025 (Resolución N° RRFECO-2025-94-APN-DIR#CNV).

De modo tal que sólo se arribó a una resolución más de seis años desde la instrucción del sumario y casi más de dos años desde el dictamen de la Subgerencia de Sumarios, lapso que se extiende a





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

nueve años desde que se efectuó la verificación de rutina en el marco de los expedientes administrativos mencionados en el considerando II.

A lo dicho cabe agregar que no se observa que los sumariados hayan obstaculizado el curso del procedimiento, lo único que se puede destacar son dos pedidos de prórroga por el corto lapso de 15 días hábiles. Por el contrario, los prolongados lapsos de inactividad procesal son atribuibles inequívocamente a la Comisión Nacional de Valores, y se presentan como el principal motivo de la dilación del sumario.

En este contexto, atendiendo especialmente a ese “análisis global del procedimiento” al que se refiere el máximo Tribunal como pauta de determinación del “plazo razonable” (Fallos: 330:3640), entiendo que en el caso de autos no ha existido proporcionalidad entre la duración del procedimiento y su conclusión para recibir una resolución definitiva, pues no se explica de qué manera se justifica un lapso de siete años para el dictado de una resolución una vez reunidos todos los elementos, si tomamos como punto de partida la clausura del período probatorio el 5/06/23. Máxime cuando la CNV no logró demostrar que el sumario hubiese tenido una complejidad de entidad suficiente para justificar lapsos excesivos es su resolución.

En definitiva, la irrazonable dilación del procedimiento administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8°, inc. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme con las pautas definidas por la Corte Suprema de Justicia en los fallos analizados a lo largo de este voto.

Por los fundamentos que anteceden, corresponde revocar la Resolución N° RRFCO-2025-294-APN-DIR#CNV del 6 de marzo de 2025, que fue objeto de impugnación, con costas a la vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

El Dr. **Juan Perozziello Vizier** adhiere al voto que antecede.



En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE**: revocar la Resolución N° RRFCO-2025-294-APN-DIR#CNV del 6 de marzo de 2025, que fue objeto de impugnación, con costas a la vencida (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El Dr. Fernando A. Uriarte no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

**Florencia Nallar**

**Juan PerozzielloVizier**

